y en la forma que indica el artículo séptimo del pliego de condiciones económico-administrativas.

La apertura de los pliegos de «Referencias» tendrá lugar en la sala de sesiones de este Ayuntamiento, a las doce horas del día siguiente hábil después de transcurridos veinte días, también hábiles, al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que el proyecto ha sido debidamente aprobado, y en el presupuesto extraordinario confeccionado al efecto figuran los créditos suficientes.

La proposición se ajustará al siguiente modelo:

Don de años de edad, estado, profesión, vecino de, con domicilio en, en nombre propio o de enterado de los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas, así como de los demás documentos obrantes en el expediente, se compromete a ejecutar las obras de instalación de alumbrado público de Zarauz, anunciadas en el «Boletín Oficial del Estado» número de fecha, con estricta sujeción al proyecto y pliegos indicados, ofreciendo una mejora del por 100, sobre el tipo de licitación de 3.184.353,75 pesetas, fijado en la convocatoria.

Se adjunta resguardo de haber constituido, por 73.687,06 pesetas, la garantía provisional exigida, así como declaración de no estar afectado de incapacidad o incompatibilidad, carnet de empresa con responsabilidad y documento nacional de identidad.

(Fecha y firma del licitante.)

Zarauz, 20 de noviembre de 1962.—El Alcalde.—5.559.

CORRECCION de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de Tardelcuende (Soria) por la que se anuncia subasta de resinas.

Habiéndose padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de fecha 26 de noviembre de 1962, página 16759, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, línea quinta, donde dice: «... de Tardelcuende, bajo el tipo de tasación de 3.542.012,32», debe decir: «... de Tardelcuende, bajo el tipo de tasación de 2.542.012,32».

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA

Sentencias

En la villa de Madrid a 4 de octubre de 1961, en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Valladolid y ante: la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de la misma capital, por don Valentín Vega Villalonga, comerciante, de aquella vecindad, con la entidad «Renero, Sociedad Anónima», domiciliada en Valladolid, sobre resolución de contrato de arrendamiento; autos pendientes hoy ante esta Sala en virtud de recurso por injusticia notoria interpuesto por el demandante señor Vega, representado por el Procurador don Francisco Álvarez del Valle, con la dirección del Letrado don Fortunato Crespo Cedrún; y habiendo comparecido, como recurrida, la Sociedad demandada, y en su nombre y representación el Procurador don Andrés Castillo Caballero, bajo la dirección del Letrado don Luis Diez Picazo.

RESULTANDO que mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 1957 a reparto de los Juzgados de Primera Instancia de Valladolid, correspondiendo al número uno, el Procurador don Luis de la Plaza Recio, a nombre de don Valentín Vega Villalonga, formuló, contra la entidad «Renero, Sociedad Anónima», demanda que basó sustancialmente en los siguientes hechos:

Primero. Que el demandante era propietario de la parte izquierda de la planta baja de la casa número cinco de la calle del General Mola de dicha ciudad, según se demostraba por escritura pública —documento número uno— otorgada el 28 de noviembre de 1952, por la que se vendió por plantas, a varios compradores, la finca antes mencionada, constando expresamente en esta escritura pública los siguientes datos:

a) Que el local que adquiría el señor Vega ocupaba una superficie de doscientos veinte metros cuadrados, a más de un pequeño cuarto que estaba debajo de las galerías, adyacentes con la parte de planta que adquiría, y que media aproximadamente tres metros.

b) Que todos los compradores aceptaban la venta que se les hacía, en las cantidades que a cada uno de los pisos y dependencias se habían fijado.

c) Que en los mencionados precios iba incluido el valor correspondiente a las partes comunes del inmueble, tales como el solar y patio, paredes maestras, acometidas generales, portal, escaleras, tejados y vivienda del portero, así como la instalación que, provisionalmente, se había hecho para un estanco en el portal; todo lo cual lo adquirirían todos los compradores pro indiviso y en proporción al valor fijado para la compra de cada uno de los respectivos pisos y dependencias.

d) Que los compradores se sometían, para el régimen de la comunidad, a las disposiciones contenidas en el título tercero del libro segundo del Código Civil, y, en cuanto a ellas no se opusieron, a las reglas que se consignarían en el Reglamento que, para la administración de los elementos comunes, confeccionarían todos los interesados.

Segundo. Que el 23 de abril de 1953 y por escritura pública —documento número dos— se procedió al traspaso del mencionado local de negocio por parte del entonces arrendatario, don Benito Peláez Poza, a la sociedad demandada, representada por su director-gerente don Francisco Hernández Fernández; intervino en la escritura el propietario del local, señor Vega, a fin de autorizar el traspaso y para en el mismo documento formalizar el nuevo contrato de arrendamiento, del que eran de interés dos cláusulas, según las cuales:

a) La renta mensual se fijaba en novecientas pesetas.

b) El señor Vega autorizaba a «Renero, S. A.» para realizar en el local objeto del arrendamiento todas las obras de ornato y de higiene que tenga por conveniente, para dejarlo debidamente acondicionado al fin para que va a ser destinado, siempre que no perjudique a la seguridad del edificio y quedando dichas obras al final del arrendamiento en beneficio del propietario de aquél.

Tercero. Que en la misma fecha, 23 de abril de 1953, y ante el mismo Notario, otorgó el demandante una autorización por la que permitía a la sociedad arrendataria para que a su vez la Sociedad Anónima Julio González Pérez ocupara

parte del local arrendado para el despacho de los géneros que esta finca trabajaba y establecimiento de sus oficinas, sin que esta autorización supusiera cesión del arrendamiento, subarriendo ni traspaso, sino una mera tolerancia que sólo subsistiría en tanto «Renero Sociedad Anónima» fuese arrendatario del local y la extralimitación de esta autorización implicaría subarriendo o traspaso no consentido.

Cuarto. Que iniciado el arrendamiento de «Renero, Sociedad Anónima», esta Sociedad hizo una serie de obras de acondicionamiento de los locales, obras que aunque no fueron directamente conocidas por el arrendador, supuso éste siempre que estarían dentro de las autorizaciones concedidas o dentro de las normas legales que regían la materia; pero en el mes de septiembre de 1957 y con motivo de solicitar la autorización para hacerse cargo de una parte de local segregado, en cuyas gestiones visitó el propietario el local arrendado, se encontró con la sorpresa de que su propiedad había sufrido una notable modificación, hasta el punto de que se le había dotado de un sótano que antes no existía; y como la sociedad arrendataria en ningún momento había solicitado su autorización para realizar tamaña modificación hizo saber a «Renero, Sociedad Anónima», en carta certificada de 24 de octubre de 1957, su sorpresa y disgusto, juntamente con el anuncio de que ejercitaría los derechos que la ley concedía; y a esta carta contestó la Sociedad arrendataria con otra fechada el 23 del mismo mes, manifestando que si no pideron autorización fué por considerar que ya la tenían con el contenido de la escritura de 22 de abril de 1953.

Quinto. Que se había producido la «extralimitación» que venía prohibida en el antes referido documento de autorización de 22 de abril de 1953; en derecho alegó lo que estimó pertinente, invocando las causas segunda o quinta y séptima del artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; terminando por suplicar se dictara sentencia declarando resuelto el contrato de arrendamiento del mencionado local de negocio, bien por las dos causas esgrimidas o bien por cualquiera de ellas y, por consecuencia, se declarase haber lugar al desahucio del demandado de di-

cho local, con apercibimiento de lanzamiento si no lo desalojase en el plazo legal y con imposición en todo caso al demandado de las costas del juicio. Se acompañaron a este escrito los documentos, entre otros, que se dejan indicados, siendo de señalar que lo transcrito en el apartado b) del hecho segundo corresponde a la estipulación octava de la escritura de traspaso, cesión y arrendamiento de 22 de abril de 1953 y apareciendo además de la copia simple de esta escritura—documento número dos— estas otras estipulaciones:

«Primera. Don Benito Peláez traspasa a «Renedo, S. A.» el establecimiento denominado «La Casa Blanca». Que, como antes se indica, se halla instalado en la planta baja, izquierda, de la casa número 5 de la calle del General Mola, de esta ciudad... Sexta. El señor Vega Villalonga da en arrendamiento a la Compañía Mercantil Renedo, Sociedad Anónima, el local traspasado y en el que estuvo instalado el comercio denominado «La Casa Blanca»... y habiéndose hecho constar en el exponiendo primero «Que don Valentín Vega Villalonga es dueño de un local de la planta baja en la casa número cinco, antes siete, de la calle del General Mola, de esta ciudad, situada a la izquierda entrando en la referida casa, por el portal de la misma»:

RESULTANDO que admitida la demanda a trámite para la sustanciación por las normas establecidas en el artículo 126 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y concordantes de la ley procesal civil, se confirió traslado de la misma, con emplazamiento, a la demandada; y el Procurador don José Menéndez Sánchez, comparecido en representación de «Renedo, Sociedad Anónima», en 10 de enero de 1958 presentó escrito de contestación, consignando en lo esencial bajo el capítulo de hechos: que del primero de la demanda es cierto, según el documento número uno unido a la misma, que el demandante adquirió el 28 de noviembre de 1952 la propiedad de la planta baja izquierda de la casa número cinco de la calle General Mola, de Valladolid, en el que tenía establecido su negocio don Benito Peláez Poza, bajo la denominación de «La Casa Blanca» y un pequeño cuarto que está debajo de las galerías, colindante con la pared del local antes indicado y del que se había segregado y cedido en arriendo a don Crescencio Sanz Redondo; aparte de los detalles de la adquisición señalados de contrario, destacaba de dicho documento que el precio de la compra de toda la planta baja izquierda referida y cuarto, fué de sesenta y cinco mil pesetas, y añadía a dichas circunstancias las siguientes:

a) Que el adquirente señor Vega, desde muchos años antes, había venido actuando casi como dueño y señor de los destinos del inmueble, hasta el extremo de firmar los recibos de la renta, sin expresar el carácter o representación con que intervenía, salvo un pequeño periodo de tiempo en que esos recibos de renta expresaron que se trataba de la «Administración de los bienes de doña Petra Santibáñez».

b) Que la renta que satisfacía el arrendatario anterior, señor Peláez, en el momento de formalizarse el traspaso a «Renedo, S. A.», y a que luego se hará referencia, era de quinientas dos pesetas con cincuenta céntimos mensuales; que del hecho segundo es cierto la escritura pública otorgada el 22 de abril de 1953, a virtud de la cual el señor Peláez, entonces arrendatario del local de negocio objeto de este litigio, lo traspasaba a «Renedo, S. A.», interviniendo en dicha escritura el propietario demandante señor Vega, a fin de autorizar el traspaso y formalizar el nuevo contrato de arrendamiento; y de este documento destacaba los siguientes extremos:

a) Que si bien el demandante consignó en el mismo su condición de propietario del local objeto del traspaso, no hizo

mención alguna del alcance o extensión de su derecho de propiedad, hasta el punto de que «Renedo, S. A.» ignoró totalmente que el inmueble se hubiese vendido por plantas a varios compradores hasta el momento en que, ya en curso las obras a que después se hará referencia, fué el propio señor Vega quien indicó al representante de la sociedad la conveniencia de consultar y recabar autorización de los propietarios.

b) Que el demandante percibió sesenta mil pesetas en concepto de su participación en el precio del traspaso.

c) Que la demandada satisfizo por dicho traspaso trescientas mil pesetas.

d) Que el demandante concertó el nuevo arrendamiento con la demandada mediante la renta mensual de novecientas pesetas, incrementándola casi el doble con omisión de los preceptos legales que sólo le facultaban para elevarla al diez por ciento.

e) Que dicha elevación de renta fué debida a que el demandante facultó a la demandada para toda clase de obras y uso del local por Julio González Pérez, Sociedad Anónima, pues de otra manera la demandada no hubiera aceptado el pago casi doble de la renta después de haber pagado tan considerable traspaso.

f) Que dicho traspaso se efectuó cinco meses después de la compra del local por el demandante, quien, en tan corto espacio de tiempo recuperaba el capital invertido y duplicaba la renta, efectuando así un magnífico negocio, que ahora pretendía redondear con esta pretendida resolución que la supondría un más pingüe beneficio económico; que el demandante no tenía aún declarado en Hacienda las rentas que percibía por los locales de su propiedad en dicho inmueble; que como aclaración del pacto octavo del contrato de arrendamiento, manifestaba que en el local arrendado no había servicio de agua, ni lavabos, ni retretes, ni calefacción, ni ninguna otra comodidad u ornato; que el señor Vega, en 22 de abril de 1953, frente al magnífico negocio que la fortuna le deparaba, estaba dispuesto a conceder y concedió amplia facultad para transformar el local arrendado, subarrendarlo y cualquier otra pretensión que la nueva arrendataria deseara a cambio del aumento de renta superior a lo que la ley le confería; que es cierto el hecho tercero de la demanda, obediendo la autorización a la misma causa antes expresada que no es exacto el hecho cuarto; en uso de la autorización que se la había concedido, la demandada, con toda clase de garantías técnicas y de modo ostensiblemente público, inició unas obras en el local arrendado, de importe superior a doscientas cincuenta mil pesetas; pero, además, excediéndose incluso en la corrección, mantuvo permanente contacto con el señor Vega, quien personalmente conoció y fué aprobando la realización de tales obras, hasta el extremo de que iniciada ya la construcción del cuarto sótano para instalación de los servicios higiénicos y de la caldera de calefacción, fueron la iniciativa y consejo del mismo demandante los que impulsaron la consulta con los demás propietarios, que presentaron todos su consentimiento expresa, total y completo a las obras que se estaban realizando, y singularmente el Administrador del inmueble don Miguel Arenas Maestro, que, en acta notarial, reconoció fehacientemente que, consultados los propietarios de la casa y examinados los planos y documentos que le facilitó don Julio González, como representante en Valladolid de la demandada, aceptaron expresamente dichas obras incluso con reserva de adquisición de derechos; y que es inexacto el hecho quinto de la demanda; adujo fundamentos de derecho y terminó por suplicar se dictara sentencia por la que se declarase no haber lugar al suplico de la demanda, absolviéndolo libremente a la demandada y con expresa imposición de costas al demandante:

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba, ambas partes usaron los medios de confesión judicial, documental, pericial, reconocimiento judicial y testifical, y además, por parte de la demandada, la de libros de comercio; habiendo informado un Arquitecto nombrado perito; que en el local comercial de que se trata se han realizado obras de decoración y la construcción de un sótano: que en éste se ha instalado los servicios de higiene y calefacción; que estos servicios son técnicamente obras de higiene y acondicionamiento del local; que el resto de las obras existentes en dicho local se las puede considerar técnicamente como de ornato y embellecimiento del local; que las obras de construcción de dicho sótano y las demás de ornato y acondicionamiento, higiénico y sanitarias no perjudican la seguridad del edificio; que la obra de construcción del sótano ha modificado la configuración primitiva del local, ya que inicialmente constaba de una planta sola, la baja, y ahora se compone de dos, baja y sótano, y que la cubicación del local primitivo era de ochocientos treinta y tres con setenta y nueve metros cúbicos la del local actual:

RESULTANDO que unidas a los autos las pruebas practicadas y celebrada vista pública de la parte actora, el Juez de Primera Instancia del número 1 de Valladolid, con fecha 15 de marzo de 1958, dictó sentencia por la que estimando la demanda deducida a nombre de don Valentín Vega Villalonga contra «Renedo, Sociedad Anónima», sobre resolución del contrato de arrendamiento del local de negocio de la planta baja de la casa número 5 de la calle General Mola, de dicha capital, donde estaba establecida la tienda denominada «La Casa Blanca» y por lo que se refiere a una de las causas resolutorias invocadas, declaró resuelto expresado contrato, por realización de obras que modifican la configuración del local, condenando a la Empresa demandada a desalojarlo y ponerlo a disposición del actor, con apercibimiento de ser lanzado del mismo si no lo efectuara en el plazo legal correspondiente, desestimando la demanda por lo que se refiere a las restantes causas invocadas, sin expresa imposición de costas en esta instancia:

RESULTANDO que apelada dicha sentencia por la representación de la Sociedad demandada y sustentada la alzada por sus trámites legales, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, con fecha 3 de julio de 1958 dictó sentencia por la que revocando la del Juzgado y desestimando la demanda interpuesta a nombre de don Valentín Vega Villalonga, se absuelve a la Entidad demandada «Renedo, Sociedad Anónima»; se imponen las costas procesales causadas en primera instancia a dicho demandante y no se hace especial imposición en cuanto a las causadas en este recurso:

RESULTANDO que sin constituir depósito, por no ser conformes las sentencias dictadas por los Tribunales de instancia, el Procurador don Francisco Alvarez del Valle, a nombre de don Valentín Vega Villalonga, ha interpuesto ante esta Sala contra la sentencia de la Audiencia recurso por injusticia notoria estableciendo las siguientes causas:

Primera. Se comprende en la tercera del artículo 136 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; y se alega: que al estimar la Audiencia que por el contrato de arrendamiento perfeccionado y formalizado en la escritura pública de 22 de abril de 1953, especialmente su cláusula octava, el arrendador recurrente señor Vega concedió a la Sociedad arrendataria demandada una autorización amplísima para que realizare cuantas obras de ornato e higiene tuviere por conveniente, sin más limitación que la de que no perjudicasen a la seguridad del edificio, y, por tanto, que las de construc-

ción de un sótano con tres pequeños cuartos para la instalación de la calefacción y servicios higiénicos está comprendida dentro de esa autorización, interpreta erróneamente el contrato de arrendamiento, infringiendo, por violación, los artículos 1.281, 1.282, 1.293, 1.285, 1.286 y 1.289 del Código Civil, en relación con el 16 del mismo Código legal; que para estimar la Audiencia que el arrendador había concedido autorización a la Sociedad arrendataria para la ejecución de las obras de la especie de las descritas, no se apoya en la apreciación de la prueba, sino en la significación o alcance que atribuye a la cláusula octava del contrato de arrendamiento, es decir, en la interpretación que le da de ahí que se trate, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, de un error en la aplicación del derecho, no en la apreciación de la prueba, es decir, de los citados preceptos legales que establecen las normas que han de observarse en la interpretación de los contratos, aplicables también a los regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos según el artículo 16 del Código Civil; por ello la causa alegada se halla comprendida en la tercera del artículo 136 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; que los preceptos legales infringidos son los citados artículos 1.281, 1.282, 1.283, 1.285, 1.286 y 1.289 del Código Civil, al no haber sido aplicados, observadas las normas que dan para la interpretación del contrato de arrendamiento, o, de entenderse que implícitamente lo han sido, al deducir de su aplicación consecuencias contrarias a las que se derivan de su texto o contenido, violándoles, por tanto, en cualquiera de los supuestos; que los términos de la mencionada cláusula octava son claramente expresivos de que las obras que autoriza han de realizarse en el local que es objeto del arrendamiento, no en otro ni fuera de éste; su clase o naturaleza han de ser «de ornato y de higiene» y han de perseguir o responder a la finalidad de «dejarle—el local—debidamente acondicionado al fin a que va a ser destinado», de donde excluye también claramente toda obra que no sea de ornato o de higiene, y, como consecuencia, todas aquellas que tiendan a ampliar el local o a incorporarle un espacio que al ser arrendado no disponía; el local objeto de arrendamiento, dice la cláusula séptima es el «local traspasado» y éste se define en el ordinal primero como «local de la planta baja de la casa número 5, antes 7, de la calle del General Mola, de esta ciudad, situado a la izquierda entrando en la referida casa, por el portal de la misma», y que se concreta más en la estipulación primera diciendo que es en donde estaba instalado el establecimiento comercial denominado «La Casa Blanca»; por tanto, las obras que no se realicen en este local, dentro del mismo, quedan fuera de la autorización de ejecución concedida en la cláusula octava comentada; como lo están las que no sean de ornato y de higiene» para acondicionar el local arrendado; y asimismo las que al final del arrendamiento no pueden quedar en beneficio del local, del propietario del mismo, ya que es condición de la autorización que las obras queden, al final del arrendamiento, en beneficio del propietario arrendador; obsérvese, no de la casa, del edificio total, sino del señor Vega, y éste no se atribuyó más propiedad que sobre el local objeto del arrendamiento; mas si se suscitaren dudas sobre cuál fué la verdadera intención de los contratantes, y de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.281 antes citado hubieran de aplicarse las normas establecidas en los siguientes artículos, véase cómo éstas ofrecen igual conclusión, pues es indudable que las obras autorizadas quedan excluidas las que se extendieran más allá de los límites físicos del local, prolongaran o ampliaran aquéllos y añadieran a éste un espacio de que antes

no disponía ni le pertenecía, pues el local lo definen e individualizan las partes, tejado y suelo, y por el contrato de arrendamiento lo que se cede al arrendatario es el uso o disfrute del espacio enterrado o comprendido dentro de los mismos para el ejercicio de una actividad de industria, comercio o enseñanza con el fin lucrativo con establecimiento abierto, según resulta del artículo 1.543 del Código Civil y 1.º de la Ley de Arrendamientos Urbanos; siendo evidente que de no contrariar la naturaleza y objeto del contrato, de no desconocerse la relación existente entre la cláusula octava con las restantes antes mencionadas del contrato de traspaso y arrendamiento, en cuanto determinan y definen claramente cuál fué el local objeto del arrendamiento, las obras autorizadas habían de limitarse, en la intención de los contratantes, al mejor aprovechamiento y disfrute del espacio cuyo uso se le cedía, pues sería contradictorio con el objeto y naturaleza del contrato referir la autorización de ejecución de obras, que lógicamente han de responder a la mejor utilización o aprovechamiento del local cuyo derecho al uso adquirían, a facultad que por el contrato no se le otorgaba, ya que se concretó el local, al espacio que comprendían al encerraban sus paredes, techo y suelo, y mucho más en el presente caso en que por pertenecer la propiedad de los diferentes pisos o plantas a distintas personas y ser el suelo elemento común o perteneciente en copropiedad a todos ellos, no podía, por carecer de poder dispositivo, conceder al arrendatario la facultad de ocupar el suelo con nuevas construcciones, cual un sótano; de ahí que se trate de supuesto o caso sobre el que no se propusieron contratar, pues de haberlo querido, por exigencia de la propia naturaleza de esas obras, hubiera sido objeto de una previsión especial; que la Sociedad arrendataria no desconocía la pertenencia de casa a distintas personas por pisos o plantas, pues era un hecho notorio, públicamente conocido, del que hubo de ser informado por el arrendatario anterior que el traspasó el local, y además porque así se deduce claramente del número primero del contrato en que la propiedad que invoca el arrendador señor Vega se refiere únicamente a este local, y sobre todo porque lo acreditan sus actos—los de la Sociedad arrendataria—, afirmados en la propia contestación a la demanda, que antes de dar comienzo a la construcción del sótano pidieron permiso o autorización a los restantes copropietarios del suelo donde se construyó, por lo que este acto de la Sociedad demandada es, de conformidad al artículo 1.282 del Código Civil, otro decisivo elemento que demuestra que la intención de los contratantes al pactar sobre la autorización para ejecución de obras examinada, no fué otra que las de limitarlas a las de ornato y de higiene a realizar dentro del recinto o espacio del local objeto del arrendamiento; circunstancias que asimismo evidencian la esencial condición a que se sometió la concesión de la autorización, o sea la de que las obras habían de quedar a la terminación del arrendamiento en beneficio del propietario señor Vega, condición que hizo función de causa o compensación económica de la autorización, y ello implica o exige que las obras autorizadas podían y debían de quedar en beneficio del propietario arrendador, por realizarse en su exclusiva propiedad, lo que excluye la autorización de todas aquellas otras, cual la ejecutada de construcción de un sótano, que por haberse efectuado en terreno que no es de la exclusiva propiedad del arrendador señor Vega, ni la Sociedad arrendataria podrá cumplir con esas obligaciones ni aquél hacer suyas las obras, siendo privado, con lesión de sus intereses, de los que había de ser elemento de su patrimonio, quebrantándose así el principio de reciprocidad a que ha de atene-

erse cuando se trata de esclarecer el sentido de los contratos onerosos y que todo evidencia el error en que incidió las obras habían de quedar a la terminación del arrendamiento en beneficio del propietario señor Vega, condición que hizo función de causa de compensación económica de la autorización, y ello implica o exige que las obras autorizadas podían y debían de quedar en beneficio del propietario arrendador, por realizarse en su exclusiva propiedad, lo que excluye la autorización de todas aquellas otras, cual la ejecutada de construcción de un sótano, que por haberse efectuado en terreno que no es de la exclusiva propiedad del arrendador señor Vega, ni la Sociedad arrendataria podrá cumplir con esa obligación ni aquél hacer suyas las obras, siendo privado, con lesión de sus intereses, de lo que había de ser elemento de su patrimonio quebrantándose así el principio de reciprocidad a que había de atenderse cuando se trata de esclarecer el sentido de los contratos onerosos; y que todo evidencia el error en que incidió la Audiencia al mantener su tesis, que extendiendo el alcance de la autorización concedida en la cláusula octava del contrato de traspaso y de arrendamiento de 22 de abril de 1953 a una situación no contemplada o excluida por él, pues indudablemente es que no es exacta esa tesis que la Audiencia mantiene de que el arrendador no puso límites a la ejecución de obras de higiene y ornato, fuera de que no perjudicasen la seguridad del edificio, ya que como evidencian tanto los términos del contrato como los demás elementos de interpretación examinados, se estableció otra y fundamental: la de haber de realizarse dentro o en el local objeto del arrendamiento, y el subsuelo no fué arrendado, a la Sociedad arrendataria, no le concedió su uso y disfrute.

Segunda. Comprendida también en la tercera del artículo 136 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; y se aduce: que la Audiencia ha infringido, por violación, el artículo 114, en su causa séptima, de dicha Ley, al declarar no haber lugar a la resolución del contrato de arrendamiento formalizado en la suya comentada escritura pública de 22 de abril de 1953, por estimar que las obras ejecutadas por la Sociedad arrendataria demandada, consistentes en la construcción de un sótano con tres pequeños cuartos, si bien altera la configuración del local, contaba con la expresa autorización del arrendador; que la autorización o consentimiento de las obras lo deduce la Audiencia de la errónea interpretación o alcance que da a la cláusula octava del meritado contrato de arrendamiento, error que se ha denunciado en la anterior causa del recurso, a cuyo contenido se remite el recurrente, de donde es evidente la infracción, por violación, del artículo y causa séptima alegada, al aplicarle a supuesto que no prevé, o no aplicarla a hechos comprendidos y previstos en la misma, ya que admitida la ejecución de las obras por la Sociedad arrendataria y que han alterado la configuración del local de negocio arrendado, no decreta la resolución del contrato de arrendamiento interesada en la demanda, por dar por supuesto el consentimiento o autorización del arrendador, que no concurre que la Audiencia estima, da como probado, tanto la ejecución de las obras como que alteran o modifican la configuración del local, y de esta apreciación de hecho ha de partirse, por lo que al demostrarse que no ha mediado el consentimiento del arrendador, es evidente la concurrencia de la causa de resolución alegada; mas aunque a efectos dialécticos se admitiera la posibilidad de discrepar de esa estimación de la Audiencia, no ofrece duda que es acertada y se ajusta a ese precepto legal y a la doctrina establecida por esta Sala, interpretándolo, pues, como declaró en la sentencia de 11 de diciembre de 1956, sea

cual fuere la mayor o menor solidez de la construcción realizada, así como su extensión superficial, desde el momento que cambia la distribución o forma del local se modifica la configuración, ya que, como dice la sentencia de 24 de mayo de 1958, es doctrina reiterada de este Tribunal que para que las obras alteren las condiciones de un edificio, basta con que modifiquen la forma o estructura de la cosa arrendada, la distribución de sus distintas partes, el aspecto peculiar de la misma, o, en general, que se produzca en ella un cambio esencial y sensible y no meramente accidental, y constituye una variación en el aspecto peculiar de la cosa arrendada y en su forma y estructura de una manera esencial el foso que tiene una anchura de un metro diez centímetros por dos metros treinta centímetros, con un fondo de veinte; de donde es indiscutible que la construcción de un sótano de las características determinadas por el Arquitecto que emitió el dictamen pericial, es obra que altera o modifica de una manera esencial la forma o estructura de la cosa arrendada y su aspecto peculiar:

RESULTANDO que admitido el recurso por la Sala, se confirió traslado del mismo, para instrucción, a la parte recurrente, la que se dió por instruida y solicitó la celebración de vista pública, quedando en su virtud, los autos para el señalamiento de ésta:

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Bernabé A. Pérez Jiménez:

CONSIDERANDO que el exclusivo tema que plantea el recurso es el de interpretación errónea de la cláusula octava del contrato de arrendamiento por la que se autoriza al usuario para realizar en el local que es objeto de arrendamiento todas las obras de ornato y de higiene que tenga por conveniente para dejarlo debidamente acondicionado al fin que va a ser destinado, en cuya argumentación prescinde de que en el pleito se alegó y sobre ello se practicó prueba de que aparte del permiso contractual fueron autorizadas específicamente las obras controvertidas de forma directa por el dueño y por medio del administrador de la finca lo que ha llevado a la sentencia recurrida a decir: «acreditados en autos que dichas obras fueron realizadas por la entidad demandada con consentimiento del propietario, donde se pone de manifiesto que el recurrente ha presentado una visión incompleta del tema cambiando la faz del litigio porque al provenir la apreciación del consentimiento conjuntamente del pacto contractual y del resultado de la prueba para su viable refutación ha de hacerse por el número cuarto del artículo 136 con base en documento o dictamen pericial que acrediten la equivocación de la aseveración, con lo que decae en esencia el recurso, ya que deja intocada parte de la base o fundamento de la sentencia, pero es que además, tampoco puede prosperar porque conforme a las normas seculares que rigen en la interpretación de los contratos, si los términos literales del mismo no fueran claros se ha de estar al sentido lógico del texto y es indudable que al facultarle para la instalación de los servicios de higiene y las obras de adecuación al fin de destino no se excluyen las que se verifiquen en el local aunque sean para dar acceso o entrada a la dependencia donde los servicios funcionan fuera del local, pues en todo caso al expirar el contrato puede reponerse sin menoscabo ni daño a su primitivo estado a cuya condición se subordina el permiso otorgado, aceptación o alcance dado por la sentencia recurrida a la susodicha cláusula octava la que por no ser absurda ni lógica hay que mantener y con más razón si se tienen en cuenta la circunstancia que concurrieron, de una parte el permiso concedido por la comunidad de propietarios del sótano donde las obras se han

efectuado y además que el arrendador recurrente percibió una suma considerable al autorizar el traspaso y elevó en gran cuantía la renta a satisfacer, todo lo cual hace pensar en que el permiso se extendía a toda clase de obras necesarias para adecuar el local al destino previsto, razones todas que inducen a la desestimación del activo primero por falta de apoyo legal:

CONSIDERANDO que el motivo segundo no puede prosperar en consecuencia a cuanto se dice anteriormente, toda vez que se articula por violación de la causa séptima del artículo 114 de la Ley que decreta la resolución del contrato de arrendamiento cuando se realicen obras sin consentimiento del dueño que alteren la configuración, supuesto que no se da en el caso de autos por mantenerse como cierto y real el permiso para las obras, por lo que no funciona el precepto que se da por contravención:

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de injusticia notoria, interpuesto por don Valentín Vega Villalonga, contra la sentencia que en 3 de julio de 1958 dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas; y librese a la citada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Ruiz Gomez.—Francisco Arias.—Aduardo Ruiz.—Bernabé A. Pérez Jiménez.—Baltasar Rull (rubricados).

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Bernabé A. Pérez Jiménez, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.

Madrid a 4 de octubre de 1961.—Rafael G. Besada (rubricado).

Autos

RESULTANDO que en los autos procedentes del Juzgado de Primera Instancia de Totana, seguidos por doña Victoriana Muñoz Felices contra don Ramón de Churruca Arellano y «Minerales No Férricos, S. A.», la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete dictó con fecha 23 de septiembre de 1960, revocando la dictada por dicho Juzgado, dando lugar a la demanda de acción reivindicatoria y otros extremos formulada por doña Victoriana Muñoz, sin hacer expresa imposición de costas;

RESULTANDO que por el Procurador don José López Mesas se ha interpuesto ante esta Sala recurso de casación por infracción de Ley contra la sentencia de segunda instancia, a nombre de don Ramón de Churruca Arellano y de la Compañía «Minerales No Férricos, S. A.», basándolo en los números primero, tercero séptimo, segundo y cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y articulando seis motivos;

RESULTANDO que comunicados los autos al Ministerio Fiscal, los devolvió oponiéndose a la admisión del recurso por englobar diversos números del artículo citado en cada uno de los seis motivos, incumpliendo el artículo mil setecientos veinte de la misma Ley, y la Sala, de conformidad con el párrafo segundo del mil seiscientos veinticinco, mandó traer los presentes autos a vista sobre admisión, con las citaciones correspondientes;

VISTOS siendo Ponente el Magistrado don Diego de la Cruz Díaz;

CONSIDERANDO que dispuesto por el artículo mil setecientos veinte de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en el escrito de interposición de los recursos de casación por infracción de Ley o de doctrina legal se expresará el párrafo del mil seiscientos noventa y dos en que se halle comprendido, con cita clara y precisa de las disposiciones que se crean infringidas y concepto en que lo hayan sido, así como que, si fueran dos o más los fundamentos o motivos del recurso se expresen en párrafos separados y numerados, el incumplimiento de estos requisitos, al ser previsto por la Ley en el apartado cuarto del artículo mil setecientos veintinueve es sancionado por el mismo disponiéndose se dicte el auto previsto en el mil setecientos veintiocho, en el que se declare la inadmisión del recurso con imposición de costas al recurrente;

CONSIDERANDO que la jurisprudencia de esta Sala vela con la mayor severidad por el exacto cumplimiento de los preceptos citados, ya que la naturaleza y finalidad de estos recursos extraordinarios no permite el acceder a revisar una resolución judicial a la que se acusa de haber cometido infracciones, en escrito que olvida el rigor formal que debe observar y vulnera de manera manifiesta los preceptos reguladores de la interposición de estos recursos;

CONSIDERANDO que como en el escrito interponiendo el que a este trámite se trae se formulan seis motivos, cada uno de los cuales se funda en varios e incompatibles apartados del artículo mil seiscientos noventa y dos, llegando alguno de ellos a la cita de cinco, con evidente confusión de los argumentos dispares que para defender las supuestas infracciones que denuncia emplea, es obvio que, la notoria de los preceptos anteriormente citados impone el declarar la inadmisión del recurso causa de esta resolución.

NO HA LUGAR, con las costas, a admitir el recurso de casación por infracción de Ley interpuesto a nombre de don Ramón de Churruca Arellano y Compañía «Minerales No Férricos, S. A.», contra la sentencia que en 23 de septiembre de 1960 dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, a la que se remitirá la correspondiente certificación, devolviendo el apuntamiento; desglócese y devuélvase al procurador de la parte recurrente el poder presentado, previo testimonio suficiente del mismo, y publíquese esta resolución en la forma prevenida por la Ley.

Madrid a cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y uno.—Juan Serrada.—Diego de la Cruz Díaz.—Vicente Guillarte.—Manuel Taboada Roca.—Tomas Ogavara.—Ante mí, Ramón Morales.—Rubricado.

SALA TERCERA

Secretaría

Relación de los pleitos incoados ante las Salas de lo Contencioso-administrativo

Secretaría del Sr. García de la Calle

Pleito número 9.623.—Doña Salomé de Plasencia y Mata, contra Resolución expedida por la Presidencia del Gobierno, sobre multa de 10.000 pesetas.

Pleito número 9.660.—Don Angel Rayuela Carrion, contra fallo expedido por el Ministerio de Hacienda (T. S. C. y D.), en 14 de julio de 1962, sobre multa de 300.876 pesetas.

Pleito número 9.505.—Don Juan Jové Ballester, contra fallo expedido por el Ministerio de Hacienda (T. S. C. y D.), en 30 de mayo de 1962, sobre multa de 126.235 pesetas.

Pleito número 9.693.—«Sociedad Anónima Joaquín Velasco y Cia.», contra Orden expedida por el Ministerio de Obras Públicas, en 6 de abril de 1962.

Pleito número 9-679.—«Nespral y Compañía, S. A.», contra Orden expedida por el Ministerio de Obras Públicas, en 6 de abril de 1962.

Lo que en cumplimiento del artículo 61 de la Ley de esta Jurisdicción se anuncia al público.

Madrid, 12 de noviembre de 1962.—El Secretario, Decano (ilegible).—6.097.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO

BADAJOS

Cédulas de citación

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado de Trabajo, en providencia dictada en los autos de juicio verbal que sobre despido ha promovido Ruperto Toscano Carmona contra Tomás Seisdedos Martín y José Martín Barroso, se cita al demandado Tomás Seisdedos Martín, en ignorado paradero, para que comparezca en la Sala Audiencia de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle Menacho, número 15, tercero, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio, en su caso, y que habrán de tener lugar el día 13 de diciembre próximo venidero, a las diez quince horas de su mañana.

Adviértesele que al juicio ha de concurrir con todos los medios de prueba que intente valerse y que los expresados actos no se suspenderán por falta de asistencia de las partes, previéndole asimismo de que si no compareciera le parará el perjuicio a que en derecho hubiere lugar.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en legal forma al demandado Tomás Seisdedos Martín, en ignorado paradero, se inserta la presente cédula en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado y establecido en los artículos 262, 270 y 725 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expido en Badajoz a 19 de noviembre de 1962.—El Secretario, F. Medina Montoya.—4.180.

En virtud de lo acordado por la Magistratura de Trabajo, en providencia dictada en los autos de juicio verbal que sobre salarios ha promovido Ruperto Toscano Carmona contra Tomás Seisdedos Martín y José Martín Barroso, se cita al demandado Tomás Seisdedos Martín, en ignorado paradero, para que comparezca en la Sala Audiencia de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle Menacho, número 15, tercero, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio, en su caso, y que habrán de tener lugar el día 13 de diciembre próximo venidero, a las diez quince de su mañana.

Adviértesele que al juicio ha de concurrir con todos los medios de prueba que intente valerse y que los expresados actos no se suspenderán por falta de asistencia de las partes, previéndole asimismo de que si no compareciera le parará el perjuicio a que en derecho hubiere lugar.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en legal forma al demandado Tomás Seisdedos Martín, en ignorado paradero, se inserta la presente cédula en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado y establecido en los artículos 262, 270 y 725 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expido en Badajoz a 19 de noviembre de 1962.—El Secretario, F. Medina Montoya.—4.183.

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado de Trabajo, en providencia dictada en los autos de juicio verbal, que sobre salarios ha promo-

vido José González Contreras y otros contra Luis Expósito Rodríguez, se citará a Antonio González Contreras y Enrique González Contreras, en ignorado paradero, para que comparezcan en la Sala Audiencia de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle Menacho, número 15, tercero, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio, en su caso, y que habrán de tener lugar el día 11 de diciembre, a las diez quince horas de su mañana.

Adviérteseles que al juicio han de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que los expresados actos no se suspenderán por falta de asistencia de las partes, previéndole asimismo de que si no comparecieren les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en legal forma a los demandantes Antonio González Contreras y Enrique González Contreras, en ignorado paradero, se inserta la presente cédula en el «Boletín Oficial del Estado» en cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado y establecido en los artículos 269, 270 y 725 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expido en Badajoz a 19 de noviembre de 1962.—El Secretario, F. Medina Montoya.—4.183 bis.

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado de Trabajo, en providencia dictada en los autos de juicio verbal, que sobre salarios ha promovido Simón Viera Pérez y otros contra Lino López Barroso, se cita a Joaquín Delgado y a Manuel García Montaño, en ignorado paradero, para que comparezcan en la Sala Audiencia de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle Menacho, número 15, tercero, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio, en su caso, y que habrán de tener lugar el día 11 de diciembre, a las diez treinta horas de su mañana.

Adviérteseles que al juicio han de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que los expresados actos no se suspenderán por falta de asistencia de las partes, previéndoles asimismo de que si no comparecieren les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en legal forma a los demandantes Joaquín Delgado y Manuel García Montaño, en ignorado paradero, se inserta la presente cédula en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado y establecido en los artículos 269, 270 y 725 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expido en Badajoz a 22 de noviembre de 1962.—El Secretario, F. Medina Montoya.—4.182

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado de Trabajo, en providencia dictada en los autos de juicio verbal, que sobre salarios ha promovido Gonzalo Dávila Sánchez contra Tomás Seisdedos Martín y José Martín Barroso, se cita al demandado Tomás Seisdedos Martín, en ignorado paradero, para que comparezca en la Sala Audiencia de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle Menacho, número 15, tercero, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio, en su caso, y que habrán de tener lugar el día 13 de diciembre próximo venidero, a las diez quince horas de su mañana.

Adviértesele que al juicio ha de concurrir con todos los medios de prueba de que intente valerse, y que los expresados actos no se suspenderán por falta de asistencia de las partes, previéndole asimismo de que si no compareciera le parará el perjuicio a que en derecho hubiere lugar.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en legal forma al demandado Tomás Seisdedos Martín, en ignorado paradero, se inserta la presente cédula en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado de Trabajo y establecido en los artículos 262, 270 y 725 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expido en Badajoz a 19 de noviembre de 1962.—El Secretario, F. Medina Montoya, 4.181.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BILBAO

Don Luis Antonio Burón Barba, Magistrado, Juez de Primera Instancia número 2 de los de esta villa.

Por el presente edicto se hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento judicial sumario de la Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don Mariano Escolar en nombre de doña Lucía Arteaga Bilbao y doña Trinidad Mafaricúa Belarcortu, a bienes especialmente hipotecados por don Baldomero Menéndez Lanza, en cuyas actuaciones se sacan a pública subasta por término de veinte días y precio de setecientos veinte mil pesetas, los siguientes bienes afectos al procedimiento y especialmente hipotecados:

1.º El departamento independiente número 1 o lonja número 1, que es la primera a la izquierda, entrando al portal, que tiene una superficie de cincuenta metros cuadrados; y linda: Al Norte, con el portal y la lonja derecha; al Sur, con la lonja número 2; al Este, con el camino de Zubieta, y al Oeste, con propiedad de don Baldomero Menéndez, participa en los elementos comunes el 5 por 100. Dicha lonja forma parte de la siguiente finca: Casa doble, señalada provisionalmente con el número 2, en el barrio de Zubieta, del barrio de Burceña, de Baracaldo, que mide en la planta de lonjas 171 metros y 78 decímetros cuadrados; consta de planta de lonjas, hoy dividida en tres, denominadas: Lonja derecha, entrando al portal, lonja número 1, que es la primera a la izquierda entrando al portal, y lonja número 2, que es la segunda de la izquierda entrando al portal; planta baja, en la que se halla el portal; planta baja, digo cinco pisos altos, y sobre el último de éstos, camarote.

En la planta baja y en los pisos altos y sobre el último de éstos, o mejor dicho en la planta baja y en los pisos altos, así como en los camarotes, existen dos viviendas denominadas: Derecha e izquierda, divididas a su vez en tres habitaciones, hall, cocina y cuarto de aseo, con ducha y lavabo; mide la totalidad de esta finca 329 metros y 77 decímetros cuadrados, correspondiendo de esta superficie a semillace 157 metros y 99 decímetros cuadrados; y linda, al Norte, con la casa número 1, provisional, del camino de Zubieta o del Calero; al Sur, de don José Ruiz; al Este, con terreno destinado a camino, perteneciente a la casa número 8 del camino de Zubieta, y al Oeste, de don Baldomero Menéndez.

2.º El departamento número 1 o lonja izquierda, entrando al portal, que mide una superficie de 63 metros cuadrados y linda: Al Norte, con el portal y las lonjas números 5, 2, 3 y 4; al Sur, con la lonja derecha de la casa doble, número 2 del camino de Zubieta; al Este, con dicho camino, y al Oeste, con propiedad de don Baldomero Menéndez, participa en los elementos comunes en 8 por 100.

3.º Y del departamento número 2 o lonja número 1, que es la primera a la derecha, entrando al portal, que tiene una superficie de 25 metros cuadrados, y linda: Al Norte, con terreno destinado a camino; al Sur, con la lonja número 1;

al Este, con el camino de Zubileta, y al Oeste, de don Baldomero Menéndez, participa en los elementos comunes el 3 por 100. Dichas lonjas forman parte de la siguiente finca: Casa triple, distinguida, provisionalmente, con el número 1 del camino al Calero, del barrio de Bureña, en Baracaldo, que mide en la planta de lonjas 257 metros y 64 decímetros cuadrados, y en la de los pisos, 224 metros y 64 decímetros cuadrados; consta de planta de lonjas sin dividir, hoy dividida en seis, llamadas: Lonja izquierda, entrando al portal, cuatro lonjas a la derecha, entrando al portal, denominadas: Primera, segunda, tercera y cuarta, y otra, denominada quinta, con entrada por el portal, planta baja y cinco pisos altos, y sobre el último de éstos, camarotes. En la planta baja y en los pisos altos, así como en los camarotes, existen tres viviendas denominadas: Derecha, centro e izquierda, divididas a su vez en tres habitaciones, hall, cocina y cuarto de aseo, con ducha y lavabo; mide la totalidad de la finca 378 metros y 56 decímetros cuadrados, correspondiendo de esta superficie, a semicalle, 120 metros y 92 decímetros cuadrados. Linda, al Norte, con terreno destinado a camino, perteneciente a la casa número 6 del camino a Zubileta, y al Oeste, con propiedad de don Baldomero Menéndez.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 8 de enero próximo a las once horas, y se previene a los licitadores:

1.º Que para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente en la Caja de Depósitos o en la mesa del Juzgado el 10 por 100 efectivo del valor de los bienes.

2.º Que no se admitirán posturas que no cubran el importe del expresado avalúo.

3.º Que los autos y las certificaciones del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de las actoras continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

4.º Que podrán hacerse posturas a calidad de ceder el remate a un tercero.

Dado en Bilbao a 26 de noviembre de 1962.—El Juez de Primera Instancia, Luis Antonio Burón Barba.—El Secretario (ilegible).—8.983.

MADRID

Cédula de citación de remate

En este Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, sito en la casa número 1 de la calle del General Castaños, se siguen autos de juicio ejecutivo promovidos por «Cantó, S. A.», contra don Joaquín Beitia Saldaña, cuyo domicilio o paradero se ignora, sobre reclamación de cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesetas con veinte céntimos, importe de una letra de cambio, con más interés legal de dicha cantidad desde la fecha del protesto de dicha cambial, gastos de éste y costas, calculados sin perjuicio de liquidación en tres mil quinientas pesetas más; en cuyos autos por providencia de esta fecha, y por la aludida circunstancia de desconocerse el actual domicilio del deudor, se ha decretado, sin previo requerimiento de pago, el embargo de la motocicleta marca «Montesa», de 125 c.c. de cilindrada, matrícula M-207.104, número de motor MM-86.103 y número de bastidor MB-86.103, y citar al señor Beitia, de remate, por medio de edictos, a fin de que en el plazo de nueve días comparezca en los autos, si le conviniere, personándose por medio de Procurador, y se oponga a la ejecución, quedando a su

disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias simples de la demanda y documentos.

Y para que sirva de citación de remate en forma legal a los fines y por el término acordados, a don Joaquín Beitia Saldaña, expido el presente en Madrid a 4 de junio de 1962, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Visto bueno: El Juez de Primera Instancia, Carlos de la Cuesta.—El Secretario, H. Bartolomé. 6.123.

El Juzgado de Primera Instancia número veinticuatro de esta capital, en providencia dictada en el día de hoy ha admitido la demanda de juicio ordinario declarativo de mayor cuantía promovido por doña María del Carmen de Suelves y Piñeyro contra su esposo, don José Salamanca y Laffitte, sobre reclamación de quinientas seis mil pesetas por deuda alimenticia, más los intereses legales correspondientes y costas, de la que se ha conferido traslado al demandado, y en su consecuencia se emplaza a don José Salamanca y Laffitte para que en el improrrogable término de nueve días comparezca en los referidos autos personándose en forma, previéndole que de no verificarlo le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho, teniendo a su disposición las copias simples de la demanda y documentos en la Secretaría de dicho Juzgado.

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a don José Salamanca y Laffitte se expide el presente para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de esta provincia, mediante a ser desconocido el actual paradero de dicho señor, en Madrid a veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno: El Juez de Primera Instancia (ilegible).—6.122.

En virtud de providencia de hoy dictada en el juicio ejecutivo seguido en este Juzgado por el «Banco Rural y Mediterráneo, S. A.», contra «GOSESA, S. A.», en reclamación de cantidad; se sacan a la venta en pública subasta, por primera vez, dos tornos mecánicos, marca «Cumbre», con motor eléctrico acoplado cada uno de ellos, embargados en estos autos, que se describen en la tasación del Perito obrante en los mismos, por el tipo de ciento veinte mil pesetas, precio de su tasación, cuya subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la calle del General Castaños, número 1, el día 20 de diciembre próximo, a las once y media de su mañana, previéndose a los licitadores:

1.º Que el tipo del remate es el expresado, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes del mismo.

2.º Que para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente el 10 por 100 del indicado tipo, sin la que no serán admitidos; y

3.º Que el depositario de los bienes que se subastan es don Ramón González de la Fuente, representante legal de la demandada, domiciliada en la calle de Diego de León, número 60.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1962.—El Juez de Primera Instancia, Miguel Granados.—El Secretario, José Molinero.—6.160.

En virtud de providencia dictada con esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia número 17 de esta capital, en los autos ejecutivos seguidos por «Finanzauto, S. A.», representada por el Procurador don Luis Piñeira, contra don Gundemaro y don Isabelo Vargas Calvo, sobre reclamación de cantidad, se saca a la venta en pública subasta, por segunda

vez y término de ocho días, los bienes embargados, consistentes en:

Un camión, marca «Pegaso Diesel», de cuatro tiempos, matrícula CR-9.244, cuyas demás descripciones constan en el informe pericial.

Para cuya subasta, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la calle General Castaños, número 1, se ha señalado el día 18 de diciembre próximo, a las doce de su mañana, bajo las condiciones siguientes:

Que servirá de tipo para esta segunda subasta la que sirvió para la primera, con la rebaja del 25 por 100, o sea por la cantidad de trescientas mil pesetas, y no se admitirá postura alguna que no cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.

Que para tomar parte en el remate deberán consignar previamente los licitadores el 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, y pudiendo verificarse dicho remate a calidad de ceder a un tercero.

Que el camión objeto de subasta se encuentra gravado con una hipoteca mobiliaria a favor de «Finanzauto, S. A.», en garantía de seiscientos noventa mil pesetas de capital, intereses de los últimos años y de la parte vencida de la anualidad corriente al 6,5 por 100 anual, y cien mil pesetas para costas y gastos, existiendo con referencia a dicha garantía un abono con cargo al principal de treinta y tres mil pesetas.

Que el precio del remate se destinará, en primer término, a cancelar la hipoteca hasta donde alcance.

Que el camión se encuentra depositado en poder de don Ramón de la Peña Rincero, domiciliado en la calle de Claudio Coello, número 5.

Dado en Madrid para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» a 24 de noviembre de 1962.—El Juez de Primera Instancia (ilegible).—El Secretario (ilegible).—8.960.

MONTORO

Don Bienvenido Espinar Rodríguez, Juez de Primera Instancia accidental de esta ciudad y su partido.

Hago saber: Cumpliendo lo preceptuado en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en este Juzgado se sigue expediente a instancia de don Antonio Quintana Calancha, como apoderado legal de don Joaquín Quintana Calancha, sobre declaración de fallecimiento del hijo de éste, don Antonio Quintana Calero, soltero, vecino que fué de esta ciudad, ne la que nació el 9 de agosto de 1930, el cual se ausentó de ella con dirección a Francia en 1948, teniendo noticias de él hasta febrero de 1949, en que cesaron de tenerse.

Dado en Montoro a tres de noviembre de 1962.—El Juez, Bienvenido Espinar Rodríguez.—El Secretario Leopoldo Romero. 8.863. 1.º 3-12-1962

OLVERA

Don Miguel García López, Juez de Primera Instancia de Olvera y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expediente gubernativo sobre la devolución de fianza del Procurador que fué de este Juzgado don Genaro Carazon Villalva, a instancia de su viuda, doña Angeles Romero González, y por el presente se anuncia el cese del mismo por fallecimiento, a fin de que en el término de seis meses, a contar de la publicación de este edicto, se puedan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes contra dicha fianza, ya que transcurrido dicho plazo se devolverá la misma a la solicitante.

Dado en la ciudad de Olvera a 30 de septiembre de 1960.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno: El Juez de Primera Instancia, Miguel García López.—6.124.

VALENCIA

Don Vicente Hervás Calatayud, Magistrado, Juez de Primera Instancia número 7 de los de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo pende procedimiento 131 de la Ley Hipotecaria, instado por don José María Martínez Chirivella contra don Luis Cristiá Suñé, en los cuales por providencia de hoy he acordado sacar a la venta en pública y primera subasta por término de veinte días y tipo de su valoración las siguientes fincas:

Primer lote

1) La habitación de la izquierda mirando de la segunda planta alta, señalada su puerta con el número 3 del edificio sito en el Cabañal, calle de los Angeles, número 49. Valorada en 42.500 pesetas.

Segundo lote

2) La habitación de la derecha mirando de la segunda planta alta, señalada su puerta con el número 4 del mismo edificio referido anteriormente. Valorada en 73.600 pesetas.

Para cuya subasta, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 29 de diciembre próximo, a las doce horas, se observarán las condiciones prevenidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente.

Dado en Valencia a 24 de noviembre de 1962.—Visto bueno: El Juez de Primera Instancia, Vicente Hervás Calatayud.—El Secretario (ilegible).—9.027.

VIGO

Don Julián San Segundo Vegazo, Magistrado, Juez de Primera Instancia número 1 de los de Vigo.

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 179, de 1962, se tramitan autos de procedimiento judicial sumario establecido en el artículo 82 de la vigente Ley de Hipoteca Mobiliaria, de 16 de diciembre de 1954, promovidos por la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo», la cual litiga en concepto de pobre, presentada por el Procurador don Francisco Lago Goberna, contra don Manuel Costas Quintela, mayor de edad, soltero, industrial y de igual vecindad que la anterior, con domicilio en Bajada a San Roque, número 42, sobre reclamación de 200.000 pesetas de principal, 12.000 pesetas más por intereses no satisfechos correspondientes a los trimestres devengados desde el 9 de agosto de 1961 a 9 de mayo de 1962 y 50.000 pesetas más para gastos y costas, o sea un total de 262.000 pesetas. Por escritura de 9 de febrero de 1959, número 334 de protocolo, otorgada en esta población ante el Notario don Cesáreo Vázquez Ulloa, el deudor señor Costas Quintela, constituyó hipoteca mobiliaria sobre un camión de transporte de su propiedad, cuyas características son las siguientes:

Marca «Perkins» G. M. C., matrícula PO. 6.970, sustituido su motor de procedencia por otro marca «Perkins», número 245, P.O., a gas-oil, de seis cilindros, modelo 28, 5 CV., número de bastidor CCKW 353.342.462 A-2, chasis G. M. C., potencia en caballos de fuerza 108 HP., tonelaje, tara 4.500; carga máxima, 8.500 kilogramos. Tercera categoría B y permiso de circulación expedido en Pontevedra el 9 de marzo de 1957.

Fué inscrita en el folio 19, libro primero de Hipoteca Mobiliaria, inscripción primera de la hipoteca número 9 del Registro de Hipoteca Mobiliaria de Pontevedra, con fecha 6 de marzo de 1959.

El precio en que las partes tasaron el vehículo para servir de tipo en la subasta ha sido el de trescientas cincuenta mil pesetas.

El mencionado vehículo se saca a pública subasta, a instancia de la parte actora, con intervención de licitadores extraños, para cuyo acto se señala la hora de once de la mañana del día 20 de diciembre próximo, en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle del Príncipe, número 56, primero derecha, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente los postores en la mesa del Juzgado o el establecimiento señalado al efecto, el 15 por 100 del tipo pactado en la escritura de constitución de la hipoteca, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pactado en la constitución de la hipoteca, que lo fué de trescientas cincuenta mil pesetas, y no se admitirá postura inferior a dicho tipo.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla segunda del artículo 84 de la vigente Ley de Hipoteca Mobiliaria están de manifiesto en Secretaría.

Cuarta.—Que dicho vehículo se encuentra en poder del deudor don Manuel Costas Quintela.

Dado en Vigo a 21 de noviembre de 1962.—El Juez de Primera Instancia, Julián San Segundo Vegazo.—El Secretario (ilegible).—6.159.

V. Anuncios

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando y Defraudación

MADRID

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 del vigente Reglamento de Procedimiento Económico-administrativo, se notifica a don Eloy Pérez Dieguez, don Enrique Carreño Taver, Mohamed Abdelkrim Cherti, don Lucas Rodríguez Curiel y Francisco Serrano Moreno, cuyos últimos domicilios conocidos eran en Marcenado, número 38, tercero, A, los dos primeros, en Madrid; calle Falange Marruecos, 3, segundo derecha, Tetuán; Santa María, número 46, Madrid, y Perla, 18, poblado dirigido, bloque 13, número 263, Carabanchel Bajo, Madrid, inculcados en el expediente número 605 de 1961, instruido por aprehensión de automóvil marca «Borgward», 44-39, marroquí, que a las diez horas del día 5 de diciembre de 1962 se reunirá este Tribunal, constituido en Comisión Permanente, para ver y fallar el citado expediente, a cuya sesión podrán concurrir por sí mismos o representados por Abogado en ejercicio con apoderamiento expreso y bastante con arreglo a derecho, advirtiéndoles lo que determinan

los artículos 77, 78, 79 y 84 de la vigente Ley de Contrabando y Defraudación, de 11 de septiembre de 1953.

Madrid, 28 de noviembre de 1962.—El Secretario, Sixto Botella L. del Castillo. Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente, José González Vilches.—6.200.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 del vigente Reglamento de Procedimiento Económico-administrativo, se notifica a don José Rodríguez Ulloa, cuyo último domicilio conocido se ignora, inculcado en el expediente número 1.085 de 1962, instruido por aprehensión de cuatro figuras de marfil, que a las diez horas del día 5 de diciembre de 1962 se reunirá este Tribunal, constituido en Comisión Permanente, para ver y fallar el citado expediente, a cuya sesión podrá concurrir por sí mismo o representado por Abogado en ejercicio, con apoderamiento expreso y bastante con arreglo a derecho, advirtiéndole lo que determinan los artículos 77, 78, 79 y 84 de la vigente Ley de Contrabando y Defraudación, de 11 de septiembre de 1953.

Madrid, 28 de noviembre de 1962.—El Secretario, Sixto Botella L. del Castillo.—Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente, José González Vilches.—6.199.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 del vigente Reglamento de Procedimiento Económico-administrativo, se notifica a don Pedro Castaño Hernández y don Guillermo Huerga Ferrero, Consejero y Encargado general de «Cafetería Montesol, S. A.», de Madrid, respectivamente, inculcados en el expediente número 1.014 de 1960, instruido por aprehensión-descubrimiento de botellas de licor, que a las diez horas del día 5 de diciembre de 1962 se reunirá este Tribunal, constituido en Comisión Permanente, para ver y fallar el citado expediente, a cuya sesión podrán concurrir por sí mismos o representados por Abogado en ejercicio con apoderamiento expreso y bastante con arreglo a derecho, advirtiéndoles lo que determinan los artículos 77, 78, 79 y 84 de la vigente Ley de Contrabando y Defraudación, de 11 de septiembre de 1953.

Madrid, 28 de noviembre de 1962.—El Secretario, Sixto Botella L. del Castillo.—Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente, José González Vilches.—6.201.

SEVILLA

Desconociéndose los actuales domicilios de Martín G. Rude, que últimamente lo tuvo en Madrid, calle General Mola, número 75; de Miguel Cerén Adán, que últimamente lo tuvo en Huelva, paseo de Buenos Aires, 10; de Angel Hermos, pa-